

La imposible neutralidad. Radios educativas y comunitarias en el contexto de conflictos socioambientales

JORGE ACEVEDO ROJAS

ABSTRACT

The article presents the main results of a research to understand and analyze the performance of two educational and community radio stations: Radio Cutivalú of Piura and Radio Marañón of Jaén, in the context of socio-environmental conflict generated by the Rio Blanco mining project (2005 -2007) located in a header basin in northeastern of Peru, whose sphere of influence includes the provinces of Huancabamba and Ayabaca in Piura region, and San Ignacio, in Cajamarca region. The study emphasizes the kinds of involvement and roles configured for both stations in the dynamics of social conflict.

RESUMEN

¿Son las radios educativas y comunitarias medios de comunicación las que promueven la violencia en contextos de conflicto socioambiental, como han sostenido algunas autoridades gubernamentales y un sector del empresariado vinculado a las industrias extractivas en el Perú? ¿Toman partido por las organizaciones sociales que se movilizan en contra de determinados proyectos mineros y energéticos? ¿Se trata, por el contrario, de medios de comunicación que informan desde una perspectiva imparcial, buscando principalmente puentes de diálogo entre las partes en conflicto? ¿O es que las radios educativas y comunitarias desempeñan diferentes roles en procesos de conflicto social, roles definidos principalmente a partir de sus enfoques o proyectos político comunicativos y en función de la propia dinámica y las fases de los conflictos, así como del comportamiento de los diversos actores involucrados? El presente artículo ofrece los principales resultados de una investigación orientada a conocer

y analizar la actuación de dos emisoras educativas y comunitarias: Radio Cutivalú de Piura y Radio Marañón de Jaén, en el contexto del conflicto socio ambiental generado por el proyecto minero Río Blanco (2005–2007) ubicado en una zona de cabecera de cuenca, en el nororiente peruano, cuyo ámbito de influencia abarca las provincias de Huancabamba y Ayabaca, en la región Piura, y de San Ignacio, en la región Cajamarca¹.

El estudio pone énfasis en el tipo de involucramiento y en los roles configurados por ambas emisoras en la dinámica del conflicto social. No se centra en los relatos periodísticos construidos por las dos radioemisoras, es decir, en un análisis de los discursos radiofónicos sino más bien en los enfoques políticos y en los roles desempeñados como medios de comunicación y actores de sociedad civil en la dinámica y diferentes etapas del conflicto.

PALABRAS CLAVE: *Comunicación, radios educativas y comunitarias, actividades extractivas, conflictos sociales.*

La mayor parte de los estudios sobre conflictos sociales en el Perú, particularmente los trabajos realizados en la última década a propósito del incremento sostenido de los conflictos de carácter socioambiental, provienen de la ciencias sociales y ponen énfasis en tres niveles de análisis: las condiciones estructurales de conflictividad social existentes en el país, principalmente la pobreza y exclusión que experimentan comunidades andinas y amazónicas en cuyos ámbitos se implementan proyectos de carácter extractivo; el surgimiento y el carácter de nuevos movimientos sociales a raíz del incremento de la actividad minera desde la segunda mitad de la década del 90, así como sus estrategias de acción pública y recursos puestos en práctica; y, el curso de conflictos sociales específicos: etapas, coyunturas, roles de los actores y desenlaces². Se trata de publicaciones que reúnen aproximaciones teóricas, metodológicas y estudios empíricos respecto a conflictos sociales vinculados al desarrollo de actividades extractivas.

Estos trabajos permiten concluir, al menos de manera general, que la dinámica de los conflictos está altamente influida por condiciones estructurales de conflictividad social: profundas asimetrías y fracturas sociales y económicas; la aparición de nuevos actores sociales (organizaciones populares e indígenas) en el ámbito de las poblaciones afectadas por la minería; por algunos actores empresariales que desarrollan prácticas tradicionales de verticalidad (y abuso de poder) en sus relaciones con las comunidades y por otros que intentan desarrollar políticas y estrategias más modernas, permeadas en algunos casos por programas de responsabilidad social empresarial; y, finalmente, por la débil y en algunos casos inadecuada presencia estatal en las zonas de conflicto, con énfasis en la promoción

1 La investigación ha sido auspiciada por el Departamento Académico de Comunicaciones de la PUCP y el Centro de Competencia en Comunicación de la Fundación Friedrich Ebert (C3).

2 Puede verse los trabajos de De Echave et. al (2009); De Echave, Hoetmer y Palacios (2009); Grompone y Tanaka (2009) entre otros.

de la inversión privada (nacional y extranjera) y no tanto en el cumplimiento de un rol regulador y fiscalizador de la actividad extractiva.

Surgen como recomendaciones generales la necesidad de contar con una autoridad ambiental autónoma del Ministerio de Energía y Minas, capaz de tomar decisiones vinculantes respecto a la aprobación de los estudios de impacto ambiental, condición necesaria para avanzar en procesos de exploración y explotación de recursos minerales y energéticos; implementar procesos de ordenamiento territorial con participación de los gobiernos subnacionales (regionales y locales); generar y/o fortalecer mecanismos de participación ciudadana. En buena cuenta, avanzar en un procesamiento institucionalizado de los conflictos sociales.

Sólo algunos estudios de caso elaborados desde las ciencias sociales incorporan una aproximación -tenué- sobre el rol de los medios de comunicación en la dinámica de los conflictos sociales. Así, en relación con el conflicto vinculado al proyecto Río Blanco, en la sierra de la región Piura, Revesz sostiene que los medios "... adoptan diversas posiciones en el proceso, cumpliendo voluntaria o involuntariamente funciones que van más allá de lo meramente informativo. Tienen un rol en la formación y difusión de opiniones y posiciones, y sobre todo transmiten y transportan el conflicto hacia otros escenarios" (2009b: 48). Se reconoce que los medios de comunicación de alcance local y regional, así como los medios nacionales y espacios y redes internacionales, se constituyen como actores importantes en la dinámica de los conflictos sociales, pero no se ha avanzado en un estudio a profundidad sobre este campo.

Desde la investigación en comunicación vinculada al campo del desarrollo, Macassi y Subauste (2009) y Macassi (2010) han elaborado aproximaciones respecto al rol de los medios y periodistas en situaciones de conflictividad social. A través de estudios de análisis de contenido de medios de comunicación, Macassi sostiene que a diferencia de los medios de alcance nacional, los medios de comunicación locales ofrecen una cobertura bastante sostenida de los conflictos sociales, desde las fases de latencia y escalamiento, hasta las etapas de crisis, eventualmente de violencia, y de procesamiento de los conflictos por la vía del diálogo. Para estos autores, los medios locales se debaten entre el rating y su responsabilidad ética vinculada a su rol de información y orientación de la opinión pública. La propia dinámica del conflicto, las posiciones asumidas por periodistas y medios, así como la débil preparación profesional de los primeros para afrontar la cobertura, generarían la pérdida de una oportunidad para aportar -desde una posición como terceros en los conflictos- al procesamiento por la vía institucional y del diálogo.

En el marco de una investigación sobre el conflicto vinculado a la Hidroeléctrica de Inambari, en el sur andino del Perú, Willer (2010) encontró tres tipos de roles desempeñados por medios y periodistas en el marco de conflictos sociales. El rol de mediador, en tanto medios y periodistas intentan abrir espacios de participación y diálogo para la búsqueda de acuerdos entre comunidades, Estado y empresas. El rol de mediador se acentuaría especialmente cuando las autoridades estarían a punto de tomar decisiones

sustantivas en el marco de situaciones de conflictividad social.

El segundo rol sería el de abogado a favor de la parte percibida como la más débil en el marco de un conflicto, generalmente poblaciones ubicadas en las zonas de ejecución e impactos posibles de proyectos extractivos. Medios y periodistas contribuirían, desde un rol de abogados en el espacio público mediático, a visibilizar la problemática de los conflictos y conocer las carencias e impactos que afrontan generalmente organizaciones sociales y comunidades indígenas.

El tercer rol sería el de representante o vocero de una de las partes, lo cual ubicaría al medio y/o al periodista prácticamente como parte directamente involucrada, sin legitimidad social para mediar en alguna etapa crítica del conflicto o parar dar espacio a la otra parte confrontada.

En la línea de análisis y reflexión de un trabajo anterior respecto al rol de las radios educativas y comunitarias en el marco de conflictos socioambientales (Acevedo 2009), sostenemos que estas emisoras construyen roles diferenciados -no estáticos sino más bien cambiantes pero a la vez coherentes desde sus perspectivas institucionales- en el marco de conflictos sociales. Parten de una visión crítica respecto a la minería, promueven la defensa de los derechos humanos y la protección del medioambiente, se ubican por ello en una posición afín a las comunidades a las que perciben como las principales afectadas por los proyectos extractivos. Pueden incluso ser parte -en determinados momentos- del tejido organizativo confrontado con el Estado o con las empresas extractivas, adoptando una posición a la que no pocas veces se la ha definido como radical, pero ello nos les impide desarrollar un seguimiento informativo y una labor de alerta en la etapa de latencia del conflicto, y configurarse también como mediadores incluso en los momentos de mayor tensión, contribuyendo de esta manera a la búsqueda de alternativas institucionalizadas de diálogo y procesamiento de los conflictos.

EL CONTEXTO DEL CONFLICTO

El proyecto minero Río Blanco se encuentra ubicado en el noreste de la región Piura, en el norte del Perú, cerca de la frontera con el Ecuador. Existen dos rutas de acceso a la zona del proyecto, una desde la localidad de Carmen de la Frontera (Piura) y la otra a través de la localidad de Namballe, provincia de San Ignacio, región Cajamarca.

El proyecto está en el área de drenaje del Río Blanco. La zona tiene influencia en tres quebradas: Cañón de Maíz, Quebrada Parradota y Quebrada El Gallo. Según la Red Muqui, conformada por organizaciones ambientalistas, las cerca de 6500 hectáreas concesionadas a la empresa minera Majaz (subsidiaria de Monterrico Metals), actualmente Río Blanco Cooper S.A., se encuentran ubicadas -de manera irregular- en los terrenos de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas y de Yanta, forman parte además de un bosque

de neblina que contribuye con el control de la calidad del flujo de agua que drena desde los páramos (3000 metros sobre el nivel del mar) a zonas más bajas. Aparte de alterar el ecosistema de las zonas altas, el proyecto impacta en las actividades agropecuarias que se realizan en localidades más bajas³. El proyecto, que implica explotación de cobre y molibdeno, está concebido para ejecutarse con tajo abierto y su duración aproximada es de poco más de 30 años.

El estudio de impacto ambiental realizado en el marco del proyecto ha tenido serias observaciones, al igual que el carácter de la concesión en tanto afecta tierras de una comunidad campesina⁴. Por ello, organizaciones sociales de cada una de las zonas afectadas, tanto de la región Piura como de la región Cajamarca, se han movilizad desde el año 2003 planteando la inviabilidad ambiental y social del emprendimiento minero. El conflicto causado por las implicancias sociales y ambientales del proyecto minero Río Blanco constituye uno de los más de doscientos conflictos sociales que experimenta el Perú, buena parte de ellos vinculados a actividades de carácter extractivo⁵.

Las movilizaciones sociales en el marco del conflicto han sido reprimidas con extrema dureza. Así por ejemplo, según la organización SERVINDI⁶, en abril del año 2004 el comunero Remberto Herrera murió por impacto de una bomba lacrimógena en el marco de una marcha de protesta en contra del proyecto en la provincia de Huancabamba, Piura. En julio del año 2005, una marcha de comuneros y miembros de organizaciones sociales hacia el campamento del entonces proyecto Majaz tuvo como resultado la muerte de una persona (el comunero Melanio García) y la tortura de 32 de los manifestantes, entre varones y mujeres, en el propio campamento de la empresa y como resultado de una cuestionada actuación de las fuerzas policiales.

En el año 2007 los alcaldes de los distritos de Carmen de la Frontera (Provincia de Huancabamba), y de Ayabaca y Pacaipampa (Provincia de Ayabaca) convocaron a una consulta vecinal para que la ciudadanía se pronuncie sobre el proyecto Río Blanco. Aproximadamente un 95% de quienes concurrieron a la consulta se manifestó en contra del proyecto⁷. El gobierno presidido por Alan García trató de desprestigiar el proceso así como a las autoridades locales organizadoras, organizaciones de sociedad civil y a medios de comunicación que mostraron una posición favorable a la consulta⁸.

Dos años más tarde, en noviembre del 2009, tres personas murieron cuando un grupo

3 Ver al respecto http://www.muqui.org/index.php?option=com_content&view=article&id=272:piura-caso-huancabamba-proyecto-rblanco&catid=14:observatorio-de-conflictos&Itemid=16 (Consulta: 15 de octubre del 2012).

4 Cabe señalar que en agosto del año 2006, La Defensoría del Pueblo remitió una comunicación a la entonces vice-ministra de Minas, Rosario Padilla, en la que remarcaba varias irregularidades en los procedimientos administrativos de autorización de exploración en el marco del proyecto Río Blanco.

5 Según la Defensoría del Pueblo, en el mes de enero del 2012, se registraban 228 conflictos en diferentes regiones del país, de los cuales 153 (67%) tenían un carácter activo y 75 (33%) eran conflictos latentes. La mayor parte de los conflictos se concentra en zonas de pobreza y extrema pobreza.

6 Al respecto puede verse: <http://servindi.org/actualidad/70660> (Consulta: 10 de octubre del 2012).

7 Con información tomada de: <http://www.todosobrerio blanco.com/> (Consulta: 10 de octubre del 2012).

8 El Ministerio de Energía y Minas, a través de un spot radial, señaló que la Defensoría del Pueblo había declarado "improcedente" la consulta vecinal. La versión fue desmentida por la ex Defensora del Pueblo, Beatriz Merino.

armado atacó el campamento minero de la empresa Río Blanco Cooper S.A. Las fuerzas policiales reaccionaron violentamente, lo que provocó la muerte de dos integrantes de la ronda campesina del caserío de Cajas Canchaque⁹.

En razón de sus ámbitos de cobertura y actuación, tanto Radio Cutivalú de Piura como Radio Marañón de Jaén, Cajamarca –ambas emisoras promovidas por la Compañía de Jesús, congregación religiosa con una significativa presencia en América Latina y el Perú– han realizado un seguimiento informativo permanente a los sucesos vinculados al conflicto, y han participado también en espacios y redes de acción colectiva, conformadas en el ámbito de la sociedad civil, para brindar soporte a las organizaciones sociales y comunidades afectadas, así como para promover puentes de diálogo orientados a facilitar el procesamiento pacífico del conflicto. La actuación de estas emisoras, como se verá más adelante, ha estado enmarcada en sus respectivos proyectos institucionales y se ha visto afectada también por la propia dinámica y por las etapas de escalamiento y crisis por las cuales ha atravesado el conflicto.

LAS EMISORAS Y SUS PROYECTOS POLÍTICO COMUNICATIVOS

Radio Cutivalú de Piura¹⁰

La radio empieza sus operaciones en octubre de 1986, promovida por el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) a través del Instituto Teleducativo Los Tallanes, ambas organizaciones creadas por la Compañía de Jesús. Inicialmente, la emisora fue concebida como una herramienta informativa para la promoción del desarrollo en la región, fortaleciendo y a su vez ampliando el número de beneficiarios (indirectos) de los proyectos de promoción del campesinado ejecutados por el CIPCA, a manera de un “altoparlante” institucional.

Sin embargo, al poco tiempo de iniciar sus operaciones los directivos y el equipo de trabajo de la radio fue re-definiendo su perfil y su identidad comunicativa en la idea de constituirse en un espacio para la participación popular, principalmente de sectores campesinos y urbanos marginados de la región Piura.

Implementó un conjunto de programas informativos y educativos cuyo eje transversal era la participación de los sectores populares. Participación política y social pero también de carácter cultural a través de la música y la narrativa regional, escrita y oral.

9 Años más tarde, según informa SERVINDI “En julio de 2011 Monterrico Metals, empresa británica propietaria de la minera Río Blanco Cooper S.A. (...) aceptó indemnizar a 28 campesinos que fueron torturados en la sede del campamento minero en el año 2005”. En: <http://servindi.org/actualidad/70660> (Consulta: 10 de octubre del 2012).

10 La aproximación al itinerario y al proyecto político comunicativo institucional ha sido elaborada en base al documento (interno) Proyecto Político Comunicativo de Radio Cutivalú, de mayo del 2011, y a un conjunto de entrevistas sostenidas con miembros de la emisora durante el año 2011.

La radio generó así mismo una red regional de corresponsales, en su mayoría educadores y comunicadores sin estudios universitarios, pertenecientes a diferentes localidades de la costa y sierra piuranas. Los corresponsales se constituyeron en una especie de voceros de sus propias comunidades, en una región que –como otras en el Perú– ha tendido a reproducir el centralismo político, económico e informativo característico del país.

Los integrantes de la radio, una combinación de jóvenes comunicadores¹¹ con experimentados promotores y educadores del CIPCA, tuvieron en los primeros años un intenso proceso de formación política y capacitación en materia de recursos y formatos educativos y comunicativos¹², en el que se puso énfasis en el rol político y cultural de la radio en la región, en la importancia del conocimiento y diálogo con los principales públicos de la radio, así como en la necesidad de responder a las problemáticas estructurales (pobreza y exclusión) pero también a los asuntos coyunturales propios de toda agenda periodística.

En la década de 1990 la radio asume una actitud crítica con relación al autoritarismo y la corrupción desplegada por el gobierno de Alberto Fujimori, además cuestionó severamente en sus espacios informativos y de opinión la aplicación del programa económico de ajuste estructural y sus impactos en los sectores más pobres.

En los años 90 Radio Cutivalú fortaleció su vínculo con la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), red de emisoras educativas y comunitarias integrada por unas 60 experiencias de comunicación en diversas regiones del país. Mediante su participación en la red, la radio proveyó de información y de visiones regionales a diversas emisoras del país, y canalizó a través de sus programaciones, perspectivas críticas respecto a la situación política y económica del país, proporcionadas por las emisoras y equipos de producción integrantes de la red.

Radio Cutivalú participó, en el marco de CNR y conjuntamente con otros medios independientes, en un esfuerzo permanente de investigación y denuncia de casos de corrupción y violación de derechos humanos perpetrados por el gobierno fujimorista. En el contexto de la segunda (e ilegal) reelección de Fujimori, la radio desplegó una intensa cobertura de la marcha de los Cuatro Suyos, movilización política y social que se desarrolló en julio del año 2000 en contra del régimen autoritario.

A principios de la década del 2000, en los inicios del proceso de transición democrática, Radio Cutivalú desarrolló un seguimiento permanente al conflicto entre el Comité de Defensa de los Intereses de Tambogrande y la empresa canadiense Manhattan, originado por el proyecto para explotar oro y otros minerales en el Valle de San Lorenzo y en la propia localidad de Tambogrande, pese al rechazo mayoritario de la población de la zona pues la iniciativa amenazaba con afectar severamente la actividad agrícola y transformar

11 Un parte importante de los periodistas y productores que participaron en la etapa fundacional de la radio y permanecieron en la emisora hasta los años del conflicto, estudiaron (paradójicamente) en la Universidad de Piura, centro de estudios de carácter conservador promovido por el Opus Dei.

12 Durante los cinco primeros años se realizan talleres de formación y capacitación, los cuales fueron conducidos por comunicadores y capacitadores de reconocida trayectoria en el ámbito de la educación radiofónica en América Latina, algunos de ellos con una valiosa experiencia previa en radios populares y educativas en la región: José Ignacio López Vigil, Amable Rosario, Amparo Cadavid, Andrés Geerts, Manuel Calvelo, entre otros.

radicalmente la forma de vida de la gente. La radio inicia entonces una actuación sostenida en el marco de conflictos sociales vinculados a la actividad minera en la región Piura.

Actualmente Radio Cutivalú tiene como misión ser un espacio de comunicación, diálogo e incidencia social y política, para que mujeres y hombres de la región Piura ejerzan sus derechos ciudadanos, se reconozca y respete sus identidades culturales, religiosas, políticas y de género, y contribuyan desde el campo de la sociedad civil a la construcción de una sociedad más justa y solidaria¹³.

Radio Marañón de Jaén, Cajamarca¹⁴

Radio Marañón fue creada con la finalidad de promover el desarrollo integral de los habitantes de las provincias de San Ignacio y Jaén, en la región Cajamarca. Promovida por el Vicariato Apostólico de San Francisco Javier del Marañón¹⁵, la radio comienza su período de prueba en el año 1976. La misión original de la radio fue consolidarse como una emisora educativa, dedicada a alfabetizar a la población campesina. Al poco tiempo de su salida al aire, Radio Unión de Lima le obsequió 300 receptores de radio exclusivos para sintonizar la programación educativa de la emisora jesuita. Testimonios recogidos durante la investigación sostienen que la gente del campo, reunidos en grupos en locales comunales, escuchaba los programas educativos producidos por profesores y productores radiales, y afianzaba de esta manera sus procesos de aprendizaje.

A principios de la década de 1990¹⁶, con la llegada de los sacerdotes Ubaldo Ramos y Luis Távara, la radio redefine su perfil comunicativo teniendo como principal referente político y comunicativo a Radio Cutivalú. Deja de ser una radio educativa y evangelizadora en un sentido más o menos tradicional, para transformarse en una emisora participativa, interesada en promover los derechos humanos, la democracia participativa y la protección del medioambiente en la zona.

En el marco de su relanzamiento, en el año 1993, Radio Marañón completó su proceso de integración a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) y en el año 1994 fue aceptada como miembro de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), con sede en Quito, casi simultáneamente se integra a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC - ALC).

La radio convocó a concurso público para seleccionar el nuevo equipo de productores y capacitadores. A diferencia de Radio Cutivalú, una parte importante de las personas seleccionadas no contaba con estudios universitarios en periodismo o comunicaciones, en

13 Plan Estratégico de Radio Cutivalú (2011-2013). Documento Interno. Piura, 2012.

14 La aproximación al itinerario y al proyecto político comunicativo institucional ha sido elaborada en base al documento (interno) Proyecto Político Comunicativo de Radio Marañón, de febrero del 2012, y a un conjunto de entrevistas sostenidas con miembros de la emisora entre febrero del 2011 y marzo del 2012.

15 Conducido también por la Compañía de Jesús.

16 Entrevista con Francisco Muguero, S.J. realizada en Jaén, Cajamarca, el 23 de febrero del 2011.

algunos casos se trataba de educadores. La emisora inició entonces un intenso proceso de pasantías –en CNR y ALER– para fortalecer las capacidades del nuevo personal.

En este marco, en el año 1993 la radio informa y acompaña la movilización social en favor de la protección de los bosques de la provincia de San Ignacio. Una empresa había recibido una concesión durante el gobierno de Alberto Fujimori para explotar recursos forestales en dicha zona, y con la finalidad de contrarrestar la movilización campesina en su contra desplegó una serie de ataques públicos en contra del comité de defensa de los bosques de San Ignacio, conformado por organizaciones sociales de la zona. La radio también fue víctima de ataques, su director, Luis Távora, y algunos de sus periodistas fueron amenazados debido a su trabajo informativo y de investigación con relación a los perjuicios ambientales de la concesión otorgada.

Durante los años 90, al igual que Radio Cutivalú de Piura, Radio Marañón se convierte en un medio crítico del gobierno de Fujimori. Cuestiona su carácter autoritario, la sistemática violación de los derechos humanos en el marco de la lucha contra la subversión, así como la política económica de corte neoliberal, considerada sumamente concesiva con el capital extranjero y nacional, a su vez atentatoria con relación a los derechos de comunidades indígenas y campesinas afectadas por diversos proyectos extractivos. Al igual que Radio Cutivalú, Radio Marañón promueve una red de corresponsales en diversas localidades de la región, especialmente en las provincias de San Ignacio y Jaén.

En diciembre de 1999, asume la dirección de la radio el sacerdote Francisco Muguiri, integrante del Consejo Directivo del CIPCA y también de INTELTA, como consecuencia de ello se estrecha la relación entre ambas emisoras. En los primeros años del nuevo siglo, la radio participa activamente en espacios de diálogo y concertación provincial y regional, como la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, constituyéndose como un actor social protagónico en la región más allá de su rol como medio de comunicación.

En concordancia con la pastoral social del Vicariato, la radio acentúa el tratamiento de temas sensibles para la población rural de las provincias de Jaén y San Ignacio, especialmente el problema de los impactos sociales y ambientales desencadenados en la zona por proyectos mineros y de explotación de recursos forestales.

La radio ve repotenciada su capacidad de cobertura en la ciudad de Jaén y localidades aledañas con la adquisición y puesta en funcionamiento de FM Stereo Marañón, que desarrolló una programación dirigida especialmente a jóvenes habitantes de la ciudad y alrededores, incorporando en la nueva señal los noticieros y programas de opinión que contaban con una significativa audiencia.

Actualmente, la radio se autodefine como un proyecto evangelizador, un espacio de encuentro intercultural, que ayuda a generar una sociedad articulada, organizada, digna y solidaria. Una emisora regional, educativa, informativa, evangelizadora, popular, cultural, campesina e inclusiva. Una radio defensora de los derechos humanos, con com-

promiso social, evangelizador, participativa, educativa, referente y actor social, intenta ser del pueblo¹⁷.

EL ROL DE LAS RADIOS EN EL MARCO DEL CONFLICTO

Posturas de partida

Tanto Radio Marañón como Radio Cutivalú de Piura son proyectos comunicativos y educativos promovidos por un sector progresista de la Compañía de Jesús. Desde sus bases programáticas fundacionales, en el caso de Radio Cutivalú, y desde su redefinición institucional a principios de la década del 90, en el caso de Radio Marañón, ambas emisoras se han definido como medios de comunicación que acompañan y a la vez son parte del movimiento popular, campesino e indígena. Se ubican "en el corazón del pueblo".

Es decir, sus posiciones de partida se sitúan en el ámbito del movimiento social, promoviendo la visibilidad de los sectores populares y rescatando las problemáticas, las alternativas de cambio, así como sus estéticas y lenguajes. Ambas radios abren espacios de participación ciudadana en la radio, en cabina o a través del teléfono, o desplazándose a mercados, plazas y espacios públicos con el objetivo de tratar participativamente las problemáticas más sentidas en diversas localidades.

Se trata de emisoras que no conciben el ejercicio periodístico y comunicativo como neutral y objetivo, sino que tienen abiertamente una opción política a favor de los derechos ciudadanos de sectores populares, rurales e indígenas, perspectiva desde la cual desarrollan su trabajo informativo y abren espacios para la participación ciudadana, para el diálogo y el debate sobre asuntos de interés público local y regional, incluso convocando a actores opuestos o críticos a sus posiciones editoriales. Desarrollan, desde sus perspectivas, un periodismo "al servicio" de los sectores empobrecidos y marginados.

Ambas emisoras tienen una vocación de actuación social y política en sus ámbitos de influencia. Una de las vías para ello tiene que ver con la dinámica de producción radiofónica y su incidencia en las agendas públicas locales y regionales, además de la articulación que tejen permanentemente con la CNR y otras redes o plataformas especializadas en el ámbito nacional: movimientos medio ambientalistas, por la equidad de género, por la descentralización, por la defensa de los derechos humanos.

Así mismo, una vía de conexión muy importante con poblaciones rurales y urbano marginadas de Piura y Cajamarca la constituyen las redes de corresponsales o agentes de comunicación, entre 60 y 70 integrantes en cada caso. Los corresponsales no son en su mayoría periodistas formados en universidades, son más bien educadores y líderes sociales con legitimidad en sus respectivas comunidades. Varios de ellos son, en este sentido, una

¹⁷ Proyecto Político Comunicativo de Radio Marañón. Documento Interno. Jaén, 2012.

especie de “voceros” de sus comunidades. Desde este rol informan, relatan y juzgan lo que pasa en sus localidades, promoviendo la participación de la gente a través de sus reportes periódicos y en los diversos espacios de las programaciones de las radios.

La otra vía de actuación social y política en sus respectivas regiones es la participación en espacios de concertación y vigilancia configurados por organizaciones de sociedad civil. Ambas radios participan y en algunos casos lideran espacios de concertación sobre políticas regionales de género, respecto a políticas y estrategias de lucha contra la pobreza, con relación a la promoción de un desarrollo sustentable, entre otros temas de articulación y acción colectiva de carácter local y regional.

En suma, las radios afrontan la cobertura y el tratamiento periodísticos de los conflictos socioambientales desde un tipo de política editorial e institucional que las ubica en el lugar de las comunidades y sus demandas, en el ámbito del movimiento social, sin que ello signifique necesariamente que pierdan una actitud crítica con relación a las organizaciones populares y mucho menos que no afronten dilemas y tensiones institucionales principalmente en etapas de crisis y violencia en el marco de conflictos sociales. Enfrentan los conflictos -editorialmente y desde su actuación en espacios de concertación y vigilancia de la gestión pública- desde la no neutralidad pero afirmando la importancia de la pluralidad de actores y voces en sus programaciones.

Escenarios de actuación

En general, la actuación de ambas emisoras en contextos de conflicto social es influida por decisiones y comportamientos que adoptan otros actores en cuatro escenarios o arenas sociopolíticas interrelacionadas. Dos de estos escenarios se ubican en el ámbito interno (institucional) y los otros dos en el ámbito externo.

En el ámbito interno, al tratarse de radios promovidas por la Compañía de Jesús, a través del CIPCA y de INTELTA en el caso de Radio Cutivalú y en el marco del Vicariato Apostólico de San Francisco Javier del Marañón, en el caso de Radio Marañón, ambas emisoras definen sus proyectos político-comunicativos y sus estrategias de intervención a partir de las orientaciones generales de la congregación. En situaciones de conflictividad social y política, los directivos de la radio consultan la opinión de miembros de la congregación y de laicos de confianza que forman parte de los directorios institucionales vinculados a las emisoras. En los casos estudiados la congregación ha respaldado la actuación de los responsables directos de las radios -los directores- y ha contribuido a que las emisoras perfilen sus roles principalmente en períodos de crisis y confrontación, enfatizando la importancia del diálogo sobre el reconocimiento de la problemática de las comunidades.

También en el campo interno, es importante reconocer el rol que cumplen los periodistas, productores y corresponsales de las emisoras en las definiciones editoriales de las emisoras. Se trata, en buena parte de casos, de comunicadores y comunicadoras que

han optado por trabajar en las radios para experimentar una especie de militancia política no partidaria, una particular combinación de profesionalismo y de apuestas políticas por el cambio a través de la comunicación social y el periodismo.

Las visiones de periodistas, productores y corresponsales son –en general– críticas a la actividad minera, y tratan de situarse desde la problemática y las preocupaciones de las comunidades afectadas, especialmente los corresponsales. Sin embargo, en el marco de una visión crítica compartida pueden encontrarse tendencias orientadas hacia la búsqueda del diálogo y la concertación, como también a la confrontación mediática especialmente cuando las emisoras y las organizaciones sociales sufren ataques por parte del gobierno y de las empresas mineras. Estas posiciones se expresan en los noticieros y programas de análisis y opinión. Configuran tensiones internas que en el transcurso del conflicto son procesadas al interior de las radios y en permanente diálogo entre los directivos y los miembros de la congregación.

En el ámbito externo es posible identificar un primer escenario configurado por las redes y espacios de concertación (locales, regionales y nacionales en algunos casos) integrados por organizaciones de la sociedad civil en los cuales participan. Las posiciones iniciales de ambas emisoras y sus decisiones en el marco del conflicto son también influenciadas por el carácter de los debates y de las intervenciones que se generan en el marco de dichos espacios. Los colectivos pueden influir en los roles que desarrollan las emisoras (pueden liderar o ser parte de acciones colectivas) así como en las posiciones que adoptan (confrontacionales u orientadas más bien al diálogo y la búsqueda de acuerdos).

La otra arena (externa) está configurada por el espacio político y público mediático en el cual operan el Estado (gobierno nacional, gobiernos regionales y locales), las empresas mineras, los medios de comunicación nacionales y locales, diversas organizaciones de sociedad civil no relacionadas directamente con las radios en el marco de espacios y redes de concertación (gremios empresariales y colegios profesionales), así como la propia opinión pública local y regional expresada mediante encuestas y otras formas de participación en el espacio público, como foros y consultas ciudadanas. Este cuarto escenario es, en la dinámica del conflicto, el más relevante para la actuación pública de las emisoras en tanto constituye una arena inherente a cualquier medio de comunicación con pretensión de influir en las agendas públicas y decisiones políticas. Las posturas y actuaciones de los actores directa e indirectamente involucrados en los conflictos impactan en las emisoras en el sentido de desencadenar posiciones más dialogantes y concertadoras o más bien posturas con un carácter más confrontacional.

Información y denuncia tempranas

El carácter regional y a la vez descentralizado de ambas emisoras ha posibilitado que desplieguen un esfuerzo informativo permanente con relación al conflicto generado por

el proyecto minero Río Blanco. Desde principios de la década pasada, ambas emisoras profundizaron su interés por informar y promover el debate respecto a las implicancias sociales y ambientales del proyecto.

A través de numerosos despachos de corresponsales ubicados en las zonas de influencia del proyecto, y también mediante los programas producidos centralizadamente en Piura y Jaén, ambas radios abrieron espacios de participación y diálogo principalmente –pero no de manera exclusiva– a autoridades y dirigentes de los distritos y comunidades afectadas por la iniciativa minera. Informaron y trataron ampliamente también las irregularidades asociadas a la concesión minera, con determinaciones poco transparentes por parte del gobierno central en favor de la empresa.

Los esfuerzos periodísticos de ambas emisoras han tenido eco en el espacio nacional, principalmente a través de su participación en la Red Informativa Nacional de la Coordinadora Nacional de Radio, servicio informativo producido y difundido por decenas de emisoras locales y regionales a lo largo y ancho del país, y también en el portal de noticias de la misma institución. Así mismo, ambas emisoras se han vinculado con otras redes y medios de comunicación de alcance nacional¹⁸, proporcionando información y elementos de análisis a lo largo de varios años.

Así, anunciaron e informaron acerca de la movilización de organizaciones comunales realizada en el año 2004 en la provincia de Huancabamba, en Piura. Denunciaron las circunstancias en las cuáles un comunero resulto muerto. Informaron tempranamente también acerca del temperamento de las organizaciones sociales luego de los sucesos de Huancabamba, y acerca de la preparación y realización de la movilización realizada en julio del año 2005, una marcha masiva hacia el campamento del proyecto minero que culminó con la muerte de una persona y con el secuestro y tortura de más de 30 comuneros de la zona.

Las radios no afrontaron periódicamente el conflicto únicamente en sus etapas de crisis y violencia, lo hicieron en la etapa de latencia y de escalamiento, tratando de cumplir desde sus perspectivas editoriales un rol de alerta y prevención de las situaciones de crisis y violencia que finalmente se desencadenaron.

Tanto Radio Maraón como Radio Cutivalú, dos años más tarde, informaron y alertaron desde sus programaciones la consulta vecinal respecto al proyecto Río Blanco convocada por los alcaldes de los distritos de Carmen de la Frontera, Ayabaca y Pacaipampa en la región Piura. Ambas emisoras transmitieron en directo el desarrollo de la consulta y sus resultados, no sólo para sus respectivas audiencias, sino también a nivel nacional e internacional a través del servicio informativo de la CNR.

A lo largo del proceso brevemente descrito, ambas radios fueron objeto de ataques por parte de autoridades gubernamentales y medios de comunicación, tanto en sus respectivas regiones como también en el ámbito nacional. Se las ha calificado, como se

18 Destacan por ejemplo el diario La República, Ideéle Radio, entre otros medios críticos de la actividad minera sin responsabilidad social y ambiental.

explicará más adelante, como emisoras "antimineras". Incluso se las ha llegado a caracterizar, sin fundamento, como medios de comunicación al servicio de sectores radicales y violentistas opuestos a la inversión privada.

Las radios al servicio de la causa de las comunidades

Según directivos y periodistas de ambas emisoras, las radios no están en contra de la actividad minera en general, sino en contra de proyectos mineros que no cumplen con estándares medioambientales mínimos y avasallan los derechos de las comunidades, contando para ello con la anuencia y complicidad de algunas autoridades gubernamentales¹⁹. Esta postura es coherente con respecto a sus proyectos institucionales, no limitaría sin embargo su capacidad para abrir espacios a las voces empresariales y gubernamentales favorables a los proyectos extractivos, así como a voces de otros actores con visiones no polarizadas: colegios profesionales, ONG no ambientalistas, universidades, centros de investigación y gremios empresariales no vinculados al sector minero.

Desde las emisoras se percibe que la causa de las comunidades afectadas por el proyecto Río Blanco es justa. Pero además, se tiene la convicción de que las organizaciones comunales opuestas al proyecto afrontan un conflicto en el marco de una profunda asimetría, pues es sumamente superior la capacidad de movilización de recursos económicos e influencias políticas que puede movilizar una empresa minera en comparación con las capacidades de influencia de las organizaciones sociales. Así mismo, se percibe que el Estado a nivel del gobierno nacional se ha convertido en un abierto impulsor de la actividad minera y despliega su capacidad coercitiva para atenuar, y en algunos casos reprimir violentamente, las protestas sociales.

En articulación con la acción directa de la empresa minera y del gobierno, otros actores han intervenido en la formación de corrientes de opinión en los ámbitos locales, regionales y nacionales a favor del proyecto. En el ámbito nacional, es importante el rol promotor de la inversión en actividades extractivas desplegado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, a través de un cabildeo directo con las autoridades gubernamentales, se especula también mediante el financiamiento de campañas electorales, así como a través de costosas campañas publicitarias de amplia difusión en medios de alcance nacional.

En el campo de las comunicaciones, destaca el rol cumplido principalmente por los grupos mediáticos El Comercio (con predominio en la prensa nacional y con participación mayoritaria en un canal de señal abierta y otro de cable), el grupo EPENSA (el segundo grupo con predominio en el sector de medios impresos) y el grupo RPP (el grupo más poderoso en el ámbito de la radio)²⁰. En los ámbitos locales y regionales, diversos medios

¹⁹ Entrevista con Francisco Muguero, realizada en Jaén el 23 de febrero del 2011.

²⁰ En el Perú se ha configurado un alto nivel de concentración mediática. Tanto en radio y televisión como en el sector de la prensa, los cuatro primeros operadores superan el 75% de participación en el mercado de audiencias promedio y de inversión publicitaria. Además, la legislación peruana no establece límites a la propiedad cruzada de medios de

de comunicación y periodistas se han sumado a una serie de campañas publicitarias y propagandísticas a favor de la iniciativa empresarial. Buena parte de estos medios enarbola la bandera de la objetividad periodística, pero son en la práctica poco "objetivos" en el sentido de informar lo que ven y registran (debido a la autocensura), y escasamente plurales.

Caracterizado así el escenario local y nacional en el que las comunidades despliegan sus esfuerzos de resistencia y lucha en contra del proyecto minero, las radios educativas y comunitarias se convierten en sus aliados casi naturales. "La gente de las comunidades, frente a un Estado ausente o que se sitúa a favor de las empresas mineras, no tiene a quién recurrir... entonces viene a la Iglesia, a la radio, nos pide ayuda pues se siente sola en sus esfuerzos por defender sus derechos"²¹.

Y las dirigencias de las comunidades afectadas por la minería, están convencidas a su vez que la construcción de alianzas con medios y redes locales, nacionales e internacionales, les abre la posibilidad de visibilizar sus problemáticas en otras arenas o ámbitos, y de influir en ciertos sectores de la opinión pública a favor de sus causas. Así por ejemplo, para Francisco Ojeda, alcalde de Tambogrande y ex presidente del Comité de Defensa de los Intereses de dicho distrito en el marco del conflicto contra la empresa canadiense Manhattan, Radio Cutivalú y otros medios locales han expresado permanentemente la "auténtica" problemática y el "verdadero" sentir de los pueblos afectados por proyectos extractivos, a diferencia de algunos medios regionales y especialmente de los "grandes medios" limeños favorables a las empresas mineras²².

Finalmente, cabe remarcar que ambas emisoras a partir de las visiones brevemente descritas, entienden que su rol es informar y abrir espacios de opinión y debate plural, pero desde un lugar o referente político discursivo cercano a las comunidades afectadas. Conciben de la misma manera el carácter de su participación en espacios de concertación y vigilancia conformados local y regionalmente por organizaciones de sociedad civil.

Crisis y radicalización

Las posiciones críticas de las emisoras con relación al proyecto minero y al rol del Estado en el marco del conflicto se acentúan y enfocan en determinados actores tanto públicos como privados como consecuencia de graves ataques directos de los que han sido objeto a lo largo del conflicto, de un contexto caracterizado por una permanente actitud confrontacional especialmente por parte del gobierno del APRA presidido por Alan García, y también debido a algunas presiones provenientes de las organizaciones sociales opuestas al proyecto.

comunicación. La gran mayoría de medios de comunicación son, además, bastante centralistas lo cual genera una sobrerepresentación de sectores locales y regionales, problema que se acentúa cuando se trata de problemáticas que tienen que ver con comunidades campesinas e indígenas.

21 Entrevista con Francisco Muguero, realizada en Jaén el 23 de febrero del 2011.

22 Entrevista con Francisco Ojeda, realizada en la localidad de Tambogrande, el 15 de febrero del 2011.

En el caso de Radio Cutivalú, en el marco de la movilización social realizada en los alrededores del campamento del Proyecto Río Blanco, en agosto del año 2005, las fuerzas policiales detienen a más de 30 personas y las llevan (ilegalmente) a las instalaciones de la empresa minera. Entre los detenidos y posteriormente torturados se encontraba el corresponsal de la radio en la zona, Julio César Vásquez. La radio movilizó una serie de esfuerzos, conjuntamente con otras organizaciones de sociedad civil de Piura, para que se libere al periodista, hecho que ocurrió varias horas después. El hecho configuraba –desde la perspectiva de los directivos de la radio– una represalia directa por parte del gobierno (y la empresa) en contra de la emisora, y podía ser interpretado también como una especie de “advertencia” para no seguir teniendo una postura crítica respecto al proyecto.

Paralelamente, tanto el CIPCA (organismo promotor de la radio), como sus directivos y la propia emisora eran objeto de ataques mediáticos principalmente por parte del diario Correo, edición regional, periódico del grupo EPENSA²³.

Como consecuencia, la radio fortalece su opción respecto a lo que considera es una causa justa y responde a lo que entiende son represalias y ataques, tanto por parte del gobierno como también por parte de sectores no gubernamentales afines a los intereses de la empresa minera.

Con relación a Radio Marañón, cabe señalar que en octubre del año 2005, luego de los sucesos de violencia ocurridos en el campamento minero del proyecto Río Blanco, el programa dominical Panorama, de Panamericana Televisión (canal de alcance nacional), denunció a través de un reportaje la supuesta existencia de una “red del terror” en la región Cajamarca, opuesta al proyecto Río Blanco, autora intelectual y material de las movilizaciones y enfrentamientos entre campesinos y las fuerzas policiales. El programa sostuvo que uno de los integrantes de la red era el director de Radio Marañón, Francisco Muguero. Se acusaba también a dirigentes de rondas campesinas de la región.

La difusión nacional del informe causó conmoción en Jaén y en un sector de la Iglesia Católica. El sacerdote inició una acción legal por difamación y calumnia en contra de los periodistas responsables de la elaboración y difusión del reportaje, y ganó el juicio en primera instancia. Paralelamente, en Jaén el periódico local El Paisa criticó sostenidamente a Radio Marañón y a su director, acusándolo incluso de cometer un homicidio en complicidad con dirigentes sociales. Al igual que en el caso anterior, el sacerdote Muguero ganó el caso por difamación y calumnia en el ámbito judicial.

Los ataques recibidos por la radio y su director fueron discutidos ampliamente por el equipo de la emisora. Lejos de ceder ante las presiones y las amenazas recibidas por algunos periodistas y corresponsales, la emisora reafirmó sus convicciones con relación al

23 Cabe señalar al respecto que desde la perspectiva del director de la edición regional de Correo, Rolando Rodrich, el diario argumenta que la inversión privada en minería es clave para el desarrollo de Piura y en general del país, y que si existen organizaciones sociales que están en contra de un proyecto minero éstas debieran procesar su rechazo por la vía institucional y democrática, no mediante la violencia y la intolerancia. El CIPCA y Radio Cutivalú formarían parte, según Rodrich, de una red de organizaciones ambientalistas (de izquierda) que en la práctica tendrían un carácter opuesto a toda inversión minera (Entrevista realizada en Piura, el 17 de febrero del 2011).

enfoque y cobertura del conflicto, profundizando su discurso crítico respecto al proyecto.

A partir de agosto del año 2006, ya con Alan García nuevamente en la presidencia de la república, el apoyo gubernamental a la inversión minera se hizo más vigoroso y abierto. A través del discurso del Perro del Hortelano, elaborado por el propio ex presidente y publicado en sendos artículos periodísticos publicados en medios de circulación nacional como los diarios El Comercio y Expreso, se criticó severamente a quienes se oponían a las inversiones mineras y consiguientemente al crecimiento económico, calificándolos de radicales y en algunos casos de violentistas. "No comen ni dejan comer", es decir no promueven el desarrollo ni el crecimiento económico pero a la vez se oponen a las inversiones y a la modernización del país²⁴. La alianza entre el gobierno y los capitales extranjeros y nacionales vinculados a las actividades extractivas se hizo cada vez más evidente.

En el año 2007, los alcaldes de los tres distritos piuranos afectados por el proyecto empezaron a organizar una consulta vecinal para preguntarle a la población si estaba de acuerdo o no con el emprendimiento minero. En septiembre de ese año, como respuesta frente al inminente proceso de consulta, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) produce y difunde en algunas emisoras de la región un spot publicitario en el cual se sostenía que la Defensoría del Pueblo había declarado "improcedente" la consulta, hecho que era falso pues este organismo había explicado que las municipalidades podían organizar consultas vecinales aunque sin un efecto vinculante en el caso del proyecto Río Blanco.

Cuando personas enviadas por el MINEM llegaron a Radio Cutivalú y solicitaron la difusión (pagada) del spot, como era una práctica habitual en la emisora el entonces director de la emisora, Rodolfo Aquino, escuchó el spot y detectó la información inexacta. Dispuso que el spot no sea difundido. La decisión, en la que también participó el sacerdote Francisco Muguero en su calidad de presidente de INTELTA, generó la inmediata reacción del gobierno aprista. El entonces presidente del Consejo de Ministros, Jorge Del Castillo, calificó el hecho como un atentado contra la libertad de expresión, una censura por parte de la radioemisora piurana al gobierno encarnado en el Ministerio de Energía y Minas: "... es un atentado contra la libertad de expresión impedir la transmisión de un aviso contratado (...). Es muy grave que exista este precedente en el Perú de hoy por parte de un medio de comunicación", expresó en CPN Radio, emisora de alcance nacional.

Los cuestionamientos y ataques a la radio por parte del ministro Jorge Del Castillo y del propio presidente Alan García continuaron y fueron reproducidos –casi sin ningún nivel de interpelación o consulta plural de fuentes– por parte de los principales grupos mediáticos del país. Entretanto, el director de la radio denunció haber recibido amenazas de muerte a través de llamadas y correos electrónicos debido a la posición de la radio respecto al proyecto.

La CNR, organización de la que forman parte Radio Cutivalú y Radio Marañón,

24 Cabe señalar que según Bruno Revesz, investigador y directivo del CIPCA, varios medios de comunicación y líderes de opinión regionales reprodujeron en parte el discurso presidencial señalando que las comunidades campesinas afectadas por el proyecto eran "ignorantes y fácilmente manipulables" por las ONG y grupos radicales (Entrevista realizada en Piura, el 16 de febrero del 2011).

desarrolló un conjunto de acciones de cabildeo en la idea de que la posición de la radio y sus razones para no difundir la pauta publicitaria del MINEM sean conocidas en Lima y, en razón del carácter centralista de la mayoría de medios, en el ámbito nacional. Además, para que se garantice la vida e integridad del director de la emisora y de su equipo periodístico, víctimas de amenazas.

Como resultado de la acción pública de esclarecimiento de los hechos vinculados a la no difusión del spot respecto a la consulta vecinal, importantes gremios vinculados a los medios y al periodismo nacional como el Consejo de la Prensa Peruana, organización que agrupa a los principales diarios del país; el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), organización conformada por periodistas; la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), así como las redes ALER y AMARC – ALC en el concierto latinoamericano, expresaron su rechazo a las críticas y amenazas gubernamentales en contra de Radio Cutivalú, afirmando el derecho del medio de comunicación de no difundir publicidad sobre la cual se tenían serios cuestionamientos en términos de la veracidad de la información contenida. La Defensoría del Pueblo tomó interés en el caso y dispuso una investigación exhaustiva de los sucesos.

Las amenazas públicas del gobierno en contra de la radio se diluyeron con el correr de las semanas, pero hubo dos represalias directas en contra de la radio y de la propia CNR. La radio solicitó la renovación de su licencia en diciembre del año 2007, trámite que no fue atendido sino hasta más de dos años después, hecho que puso a la emisora en una situación de gran vulnerabilidad legal y política. En cuanto a CNR, los ingresos por intermediación de publicidad estatal para las emisoras integrantes de la red cayeron a un 25% entre mediados del 2007 y comienzos del 2008, hecho que fue calificado por los directivos de la institución como un mecanismo de censura indirecta por parte del gobierno aprista.

Cabe señalar que en el contexto de la confrontación pública entre Radio Cutivalú, la CNR y el gobierno, la empresa minera responsable del proyecto solicitó a la radio suscribir un contrato para la difusión de avisos publicitarios a favor de la inversión privada y de lo que se presentaba como los impactos positivos en la calidad de vida de la gente de las comunidades cercanas. La solicitud generó un intenso debate interno en la emisora pues, para un sector del equipo periodístico, difundir los spots de la empresa significaba poco menos que contradecir la línea editorial de la radio²⁵, en tanto que para otro sector de directivos y periodistas la difusión de la pauta publicitaria no tendría por qué interferir en la orientación política de la emisora.

Finalmente, la radio decidió difundir los spots hecho que generó no sólo algunas resistencias internas sino que propició en las poblaciones afectadas por el proyecto un nivel de malestar con relación al comportamiento de la emisora. La radio habría recibido incluso algunas llamadas desde las zonas afectadas por el proyecto, señalando que estaba

25 Entrevista con Edgard Cárdenas, ex jefe de informaciones de Radio Cutivalú, realizada en Tambogrande el 15 de febrero del 2011.

“traicionando” su compromiso con las comunidades²⁶. En respuesta a las críticas de un sector de las organizaciones sociales, la radio decidió explicar públicamente que la pauta publicitaria contratada por la empresa no comprometería en absoluto su línea editorial con relación al conflicto. Las críticas por la difusión de los spots publicitarios en apoyo al proyecto Río Blanco se diluyeron a los pocos días.

Aunque de orden distinto y con una diferencia notable de poder respecto a los ataques y hostigamientos gubernamentales y de actores privados vinculados a la empresa, las presiones recibidas desde un sector de las comunidades también influyeron en la radio en términos de afirmar sus posiciones editoriales críticas al emprendimiento minero.

A favor del procesamiento institucional del conflicto

A partir del año 2008, luego de la consulta vecinal realizada en los distritos afectados por el proyecto y pasada la etapa de crisis, altamente confrontacional con el gobierno, ambas emisoras continuaron desarrollando un seguimiento informativo permanente respecto al conflicto.

Sin variar sus posiciones editoriales críticas al proyecto y a sus impactos negativos en el ámbito de los ecosistemas y las comunidades cercanas, ambas emisoras centraron sus esfuerzos en informar acerca de lo que consideraban nuevos atropellos en contra de los derechos de las poblaciones –como la brutal represión policial luego del ataque delincuenciales al campamento minero en el año 2009– visibilizando también las acciones de incidencia por parte de las organizaciones sociales, pero propiciando a la vez espacios de diálogo y búsqueda de acuerdos entre las comunidades afectadas, el gobierno y la empresa minera.

Aunque cabe señalar, con relación a este último aspecto, que se reconoce en las emisoras una debilidad en términos de debatir una gama más amplia de opciones de política institucional y editorial orientadas a la prevención y al diálogo, así como la ausencia de un esfuerzo sistemático en términos de formación y capacitación de los periodistas, productores y corresponsales de las radios en lo que se refiere a marcos conceptuales y herramientas metodológicas para el análisis, la prevención y transformación de conflictos en oportunidades de desarrollo sostenible para las comunidades.

26 Es importante señalar que en el marco de algunas movilizaciones sociales originadas por conflictos de carácter socioambiental, periodistas de medios de comunicación críticos de las protestas sociales han sido víctimas de amenazas y en algunos casos de ataques físicos, bajo el argumento de que representan los intereses de grandes empresas extranjeras y nacionales y atentan contra el derecho a la información de las comunidades, distorsionando la información y las visiones de cara a la opinión pública nacional. Aunque entendible el malestar de las comunidades por el carácter centralista y excluyente de buena parte de las agendas mediáticas, no se justifica la violencia.

A MANERA DE CIERRE

La investigación realizada a partir de la actuación de Radio Cutivalú y Radio Marañón en el marco del conflicto generado por el proyecto minero Río Blanco, revela que las radios educativas y comunitarias en el Perú desarrollan sus políticas editoriales respecto a contextos de conflictividad social a partir de principios de carácter identitario que las definen como proyectos político comunicativos orientados al cambio social, a la transformación de las relaciones de poder respecto a las comunidades en las que operan, al ejercicio de derechos ciudadanos y a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones ubicadas en sus ámbitos de influencia. Afrontan los conflictos desde la no neutralidad, pero abriendo espacios para una pluralidad de actores y voces divergentes a sus planteamientos. Las políticas editoriales y los discursos de las radios sobre el cambio y el desarrollo social y humano incorporan dimensiones de sustentabilidad ambiental, de derechos ciudadanos y de autodeterminación.

En este marco, las radios parten de una visión crítica respecto a la actividad minera, aunque sostienen a la vez no oponerse a todos los proyectos y a todas las formas de relación entre empresas y comunidades, siempre y cuando se garantice el respeto a sus derechos. Apostarían, en este sentido, por proyectos social y ambientalmente responsables, ubicados en zonas en las que no se ponga en riesgo los ecosistemas, la calidad y los estilos de vida de las poblaciones.

Estas emisoras caracterizan a las comunidades afectadas como actores colectivos que no pueden asumir la confrontación con el Estado y con empresas mineras en igualdad de condiciones, por lo tanto deciden situarse como una especie de aliados estratégicos en procesos de cabildeo e incidencia pública y política, visibilizando sus problemáticas, demandas y propuestas, tratando de situarlas en agendas públicas y políticas de muy difícil acceso para poblaciones rurales e indígenas.

Producto de su cercanía y en algunos casos de su participación en el tejido social, las radios experimentan una tensión permanente. Confrontan sus identidades y roles como medios de comunicación con su autodefinición como actores sociales (y políticos) vinculados a procesos de cambio y desarrollo social. Participan y son condicionadas a la vez por el movimiento social, pero toman distancia –no sin dificultades– de las organizaciones sociales para informar y opinar buscando mayores márgenes de autonomía.

Sus definiciones identitarias, su incorporación, cercanía y en algunas coyunturas distancia con el movimiento social, definen las características de los procesos de mediatización de los conflictos que llevan a cabo. Pueden radicalizar sus posiciones en tanto perciban marcadas asimetrías estructurales y mediáticas en el conflicto, y se vean amenazadas y hostigadas por actores privados y gubernamentales, como en los casos de Radio Cutivalú y Radio Marañón.

Los roles que asumen, en consecuencia, no son estáticos sino más bien cambiantes pues responden a la dinámica de cada conflicto, a escenarios o arenas de actuación (tanto

internas como externas) y al comportamiento de los actores involucrados en cada uno de estos. Por ello, pueden, en ciertas coyunturas, abonar al diálogo y el procesamiento de los conflictos por vías institucionales. Y podrían hacerlo de mejor manera si incorporasen en sus prácticas organizativas procesos de debate y de formación especializada en materia de un rol preventivo en el marco de conflictos, conducente a tender (o fortalecer) puentes de diálogo entre las partes directamente confrontadas.

Cabe señalar que este tipo de emisoras contribuye, a través de su articulación en redes nacionales e internacionales de medios alternativos y comunitarios, a visibilizar causas y dimensiones no abordadas por los medios masivos de carácter comercial, extremadamente centralistas y excluyentes en relación con las problemáticas locales (especialmente rurales e indígenas), medios que generalmente abordan los conflictos en sus fases de crisis y violencia, y principalmente desde perspectivas oficialistas y pro-empresariales.

Las radios educativas y comunitarias contribuyen, de esta manera, a situar los conflictos en otras arenas –nacionales e internacionales– del moderno espacio público configurado por las redes multimedia. Desarrollan una perspectiva política y discursiva que pone de relieve las visiones de las organizaciones sociales y redes de sociedad civil, especialistas, activistas, líderes sociales y autoridades locales respecto a las problemáticas que enfrenta las comunidades.

Tratan de complejizar, así, la construcción de relatos y la comprensión respecto a los conflictos sociales, ofreciendo una alternativa crecientemente significativa y controversial a la vez respecto a la manera cómo se informa y caracteriza una problemática extendida en el Perú a raíz del boom minero de las dos últimas décadas, considerado por los últimos gobiernos y un sector del empresariado como el principal motor del crecimiento económico.

BIBLIOGRAFÍA

- ACEVEDO, Jorge (editor) (2006) Voces y movidas radio ciudadanas. Lima, Coordinadora Nacional de Radio.
- ACEVEDO, Jorge (2010) "Comunicación y conflictos socioambientales en el Perú. Radios educativas y comunitarias en la encrucijada". En Diálogos de la Comunicación, No. 81 abril – junio 2010. FELAFACS En: http://www.dialogosfelafacs.net/revista/upload/articulos/pdf/articulopdf_149.pdf Última consulta: 12 de septiembre del 2010.
- BENESSAIEH, Afef et. al. (2004) Políticas de ciudadanía y sociedad civil: en tiempos de globalización. Caracas, Universidad de Venezuela. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
- DE ECHAVE, José et. al. (2009) Minería y conflicto social. Lima, IEP – CIPCA – CBC – CIES.
- DE ECHAVE, José; HOETMER, Raphael y Mario PALACIOS (coordinadores) (2009) Minería y territorio en el Perú. Conflictos, resistencias y propuestas en tiempos de globalización.

- Lima, CONACAMI – Facultad de Ciencias Sociales UNMSM – COOPERACION – Programa Democracia y Transformación Global.
- DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2010) Reporte de Conflictos Sociales No. 79. Lima, Defensoría del Pueblo – Adjuntía para la Prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad.
- ENTELMAN, Remo (2005) Teoría de conflictos. Hacia un nuevo paradigma. Barcelona, Gedisa.
- GEERTS, Andrés y Víctor VAN OEYEN (2001) Vigencia e Incidencia de la Radio Popular en América Latina. Quito, ALER.
- GEERTS, Andrés; Víctor VAN OEYEN y Claudia VILLAMAYOR (2004) La práctica inspira, la radio popular y comunitaria frente al nuevo siglo. Quito, ALER – AMARC,
- GALTUNG, Johan (2003) Paz por medios pacíficos: paz y conflicto, desarrollo y civilización. Bilbao: Bakeaz , Gernika Gogoratuz.
- GROMPONE, Romeo (2009) "Los movimientos sociales en el Perú y sus marcos explicativos". En: GROMPONE, Romeo y Martín TANAKA. Entre el crecimiento económico y la insatisfacción social. Las protestas sociales en el Perú actual. Lima, Instituto de Estudios Peruanos, IEP. Pp. 9 – 58
- MACASSI, Sandro (2010) "Medios y conflictos sociales entre el rating y el activismo". En Diálogos de la Comunicación, No. 81 abril – junio 2010. FELAFACS En: http://www.dialogosfelafacs.net/revista/upload/articulos/pdf/articulopdf_155.pdf Última consulta: 10 de octubre del 2010
- MACASSI, Sandro y Enrique SUBAUSTE (2009) Principales hallazgos del estudio sobre el tratamiento informativo y gestión periodística en los conflictos medioambientales. Lima, ACS Calandria.
- MELUCCI, Alberto (1980) "The new social movements: A theoretical approach" In Social science information, vol. 19. No. 2 Pp. 199-226.
- REVESZ, Bruno (2009a) "Tambogrande: de la defensa del agro a la defensa del derecho a decidir". En: DE ECHAVE, José et. al. Minería y conflicto social. Lima, IEP – CIPCA – CBC – CIES. Pp. 17-44.
- REVESZ, Bruno (2009b) "Disputas por la legalidad, los derechos de propiedad y el futuro agrícola o minero de la sierra de Piura. El caso Majaz". En: DE ECHAVE, José et. al. Minería y conflicto social. Lima, IEP – CIPCA – CBC – CIES. Pp. 45 – 72.
- SEN, Amartya (2000) Desarrollo y Libertad. Buenos Aires, Planeta.
- WILLER, Hildegard (2010) Local Public Spheres and Social Conflicts. A case study from Peru. Tesis para optar el grado de master en Journalism and Media within Globalization. Universidad de Hamburgo.